

32 REVISTA

# CIENCIAS SOCIALES

diciembre 2010



Luis Andrés Rosero

Christian Arteaga

Maribel Berenice Melo Cartagena

Natalia Sierra

Mario Unda

Julio Echeverría

# Ciencias Sociales

Revista de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas

Universidad Central del Ecuador

## Instituciones

Universidad Central del Ecuador

Rector: Edgar Samaniego Rojas

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Decano: Carlos Reyes

Escuela de Sociología y Ciencias Políticas

Director: Nicanor Jácome

## Director:

Rafael Quintero López

## Comité Asesor:

Natalia Arias

Enrique Ayala

Susana Balarezo

Jaime Breilh Paz y Miño

Wilson Herdoiza

Ariruma Kowii

César Montúfar

Francisco Rohn

Wilma Salgado

Erika Silva

Rose Marie Terán

## Consejo Editorial:

César Albornoz

Milton Benítez

Pablo Celi

Julio Echeverría

Mauricio García

Daniel Grandá

Francisco Hidalgo

Nicanor Jácome

Alejandro Moreano

Gonzalo Muñoz

Rafael Romero

Napoleón Salto

Mario Unda

Silvia Vega

Marco Velasco

## Administradora:

Marcela Escobar - Teléfono: 2-231-814

## Comunicador Social:

Fernando García - Teléfono: 2-231-814

## Ira. Edición:

Ediciones ABYA-YALA

12 de Octubre 14-30 y Wilson

Casilla: 17-12-719

Teléfono: 2506-247/ 2506-251

Fax: (593-2) 2506-267

E-mail: [editorial@abyayala.org](mailto:editorial@abyayala.org)

Sitio Web: [www.abyayala.org](http://www.abyayala.org)

Quito-Ecuador

## Impresión

Ediciones Abya-Yala

Quito - Ecuador

## ISSN:

0252-8681

## ISBN ABYA YALA:

978-9978-22-975-0

Las ideas vertidas en los artículos de esta publicación son responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente a los criterios de esta revista. La Revista Ciencias Sociales no se compromete a devolver los artículos no solicitados.

## Para correspondencia dirigirse a:

Dr. Rafael Quintero. Director de Revista Ciencias Sociales

Casilla # 17034613A, Quito-Ecuador

Teléfono: (593-2) 234-5024

Fax: (593-2) 256-5822

Correo electrónico: [bernardoql@yahoo.es](mailto:bernardoql@yahoo.es)

Fundada en 1976 por Rafael Quintero López

Director 1999-2001: Julio Echeverría

Director 2002: Manuel Chiriboga

Impreso en Quito-Ecuador, diciembre 2010

# Índice

Editorial .....	5
<i>ANÁLISIS SOBRE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR</i>	
“La crisis de la civilización del capital” .....	9
Luis Andrés Rosero	
“Ciudadanía: diez sentidos de domesticación” .....	51
Christian Arteaga	
“El proceso ‘Correa’: un breve análisis del actual proceso ecuatoriano” .....	83
Natalia Sierra	
“La nueva hegemonía ciudadana. Elementos para su análisis”	117
Mario Unda	
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN	
“Los cambios de las políticas migratorias españolas en el segundo período de gobierno de José María Aznar” .....	173
Maribel Berenice Melo Cartagena	

“Participación social, movimiento social y modelo político en Ecuador de las últimas décadas” .....	225
Julio Echeverría	

# El Proceso "Correa"

## Un breve análisis del actual proceso político ecuatoriano

Natalia Sierra Freire

### 1. Crisis Política e Institucional

A finales de los años setenta América Latina vuelve al régimen democrático después de años de dictaduras militares. La nueva época democrática vino acompañada y cualificada por la política económica neoliberal, la misma que garantizaba la expansión, acumulación, concentración y centralización del capital en la época de la globalización. Conocido es por todos los efectos económicos, sociales y políticos que la aplicación de las directrices neoliberales produjo en los países del sub continente, y específicamente en el Ecuador.

En términos económicos se produce la descomposición de las economías nacionales periféricas, por efecto de la destrucción del aparato productivo nacional y la expansión del capital productivo y financiero transnacional.

En términos sociales, la destrucción del aparato productivo nacional produce mayor desempleo y por lo tanto mayo-

res niveles de exclusión y marginalidad social. Las condiciones de vida de la mayoría de la población se deterioran aceleradamente y se incrementa la migración de mano de obra barata liberada de las destruidas economías nacionales.

En términos políticos institucionales se produce la reducción y debilitamiento del Estado Nacional, históricamente precario en América Latina y sobre todo en los países andinos. El Estado dejó de ser la expresión política que regula los negocios para configurarse en un aparato de seguridad de las corporaciones transnacionales. La institucionalidad democrático burguesa es tomada por las mafias incrustadas en el Estado Nacional, mafias que se reacomodan en su articulación a las grandes corporaciones transnacionales y que generan mayor deterioro institucional.

Para fines de los años 80 del siglo pasado, a diez años de la democracia neoliberal, el movimiento indígena, heredero de la organización campesina-obrera de los años 60s y 70s, irrumpe en la escena política con el primer levantamiento indígena a nivel nacional. El carácter uninacional, clasista y excluyente del estado ecuatoriano es develado por la reivindicación indígena de la plurinacionalidad y la denuncia de su situación histórica de clase explotada y excluida de las decisiones políticas de la sociedad ecuatoriana. El desvelamiento de la fragmentación étnica y clasista de la sociedad ecuatoriana destapó el vacío inherente a la estructura política liberal burguesa; en este sentido se puede decir que la lucha del movimiento indígena produce una herida en la credibilidad de la institucionalidad burguesa desde la época del gobierno de Rodrigo Borja (teniendo en cuenta que este gobierno es quizá el que mejor manejo la institución del Estado nacional.)

Después del gobierno de Sixto Duran Ballén, la institución estatal profundamente deteriorada no es capaz de mantener un gobierno por los cuatro años para los que éstos son elegidos. Movimientos populares, campesinos e indígenas de distinta composición deponen los gobiernos de Bucarám, Mahuad y Gutiérrez. Son más de 12 años de inestabilidad política-institucional que evidencian la inconsistencia del Estado Nacional,

digo inconsistencia pues estoy convencida de que la crisis del Estado Nacional Burgués no se explica por algún fenómeno externo al mismo, sino por su propia constitución. Ya desde hace mucho la crítica teórica de izquierda advirtió sobre el carácter de clases del Estado Nacional, carácter invisibilizado por el discurso dominante que hacía del Estado la instancia de acuerdo y reconciliación nacional. El significante Estado-nación no hace sino tapar el vacío abierto por la contradicción de clases que articula la sociedad moderna capitalista. Sobre este significante, que corresponde al orden de lo simbólico, se estructuró la identidad imaginaria del Estado-nacional; fantasía ideológica que articuló un campo de sentido desde el cual los sujetos-ciudadanos se pensaban y actuaban como parte de una comunidad compacta y homogénea. Sujetos vaciados de sus contenidos patológicos de clase, es decir de sus intereses concretos de acuerdo al lugar que ocupan en el orden social, económico y cultural de la sociedad capitalista. Cada una de las últimas movilizaciones populares y, sobre todo, las que destituyeron gobiernos fueron destapando y agudizando la profunda crisis que atraviesa la institución política liberal, rompiendo la fantasía ideológica de la unidad nacional y dejando ver la vacuidad esencial del significante Estado Nacional.

La última gran revuelta popular que derrocó al gobierno de Gutiérrez, cuyo principal protagonista fue la clase media de la sierra y básicamente de la ciudad de Quito, destapó de manera definitiva la crisis de la institución estatal. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni el poder Judicial y, aún más, ni el poder de la comunicación mediática tenían credibilidad. La gente por un momento dejó de creer en el Estado y la Democracia Liberal, esta retirada de la fe en el sistema político nos acercó al filo del abismo, desde donde pudimos mirar la "Cosa", el elemento extraño, traumático que no puede ser simbolizado, que no puede ser integrado al orden del Estado Nacional: el insuperable antagonismo de clases. La "Cosa" que no puede ser integrada por cuanto está en el orden de lo Real, sin embargo es lo que articula el orden simbólico y el orden imaginario del Estado Nacional liberal democrático.

La consigna "fuera todos" que se escuchó en las movilizaciones "forajidas" era la constatación de la pérdida total de fe en la institución estatal; falta de fe que dejó por un momento sin piso al Estado, el mismo que estaba a punto de desplomarse, de desaparecer. Un momento que suspendió el tiempo del relato político moderno y abrió el paréntesis a-histórico que anuncia las épocas pre-revolucionarias. Pero la revolución no se dio, toda la potencia pre-revolucionaria fue absorbida en la continuidad de la historia presente o será mejor decir en la continuidad del "fin de la historia". Desde el pensamiento de Walter Benjamin ponemos decir que no fue posible dar el salto dialéctico, al punto de la falla, al punto exacto de lo que no fue, en el cual se recoge la urgencia revolucionaria de las clases oprimidas de todas las épocas.

¿Qué pasó? Enfrentados al vacío, a la catástrofe política, que la retirada del Estado Nacional dejaba, es decir, enfrentados al insuperable antagonismo social, hay dos posibilidades: 1. provocar el acontecimiento revolucionario, lo que implica atravesar el vacío, caminar sobre las ruinas, articular la verdad de la catástrofe, diría Zizek, que pasa por discernir la oportunidad única para la revolución. Posibilidad de quebrar el Estado Nacional Burgués *"e inventar una forma social comunal sin ejército, policía o burocracia en pie, en que todos pudieran tomar parte de la administración de los asuntos sociales."* Esta posibilidad que parece una locura y que de hecho lo es, muestra la urgencia del momento que es la verdadera utopía. De hecho no existen condiciones objetivas para la revolución, esta se da siempre por una subjetividad "delirante" con pasión por lo Real. 2. retroceder, cerrar la posibilidad del acontecimiento revolucionario, retornar a la cordura y atrincherarse en los restos del Estado Burgués para reencaucharlo. Abortar la urgencia del momento, volver a lo conocido que al fin de cuentas es "mas seguro" que lanzarse a la aventura de lo no conocido, de lo aún no.

En definitiva no hay opciones, la idea que se puede elegir es siempre falsa, solo hay una opción y para abril del 2005, momento culminante de la luchas populares de la dos últimas décadas, solo era posible reencauchar el Estado. Esta opción no

responde a la objetividad de las condiciones dadas, sino más bien a la subjetividad de los sectores que lideraban la movilización. El movimiento "forajido", cuya composición básica era la clase media quiteña, horrorizado ante el vacío institucional y la emergencia de la "Cosa" no podía sino retroceder. La ausencia de orden simbólico, la inminente muerte del ciudadano (sujeto político moderno), el aniquilamiento radical del tejido institucional del estado burgués, mediante el cual se constituye la llamada realidad política, es demasiado traumatizante para un sector medio que de todas maneras tiene algo que perder si este orden simbólico se desploma. Si de veras el "ciudadano" de las revueltas de abril del 2005 hubiese caminado hasta el lugar vacío de la "Cosa" se hubiese permitido concebir la posibilidad de un aniquilamiento total del Estado, lo que implicaba atravesar la fantasía ideológica del ser ciudadano y asumir la muerte simbólico-política y de ahí, solo de ahí, inventar otro orden político.

Derrocado el gobierno de Gutiérrez, se restableció el orden institucional con la designación del vicepresidente Palacio como presidente constitucional de la República, por el período que faltaba para concluir los cuatro años para los que fue elegido el gobierno. Ante la profunda crisis institucional, Palacio ofreció re-fundar la nación, promesa que los sectores medios quisieron creer. Pero ¿qué significaba refundar la nación, recomponer el orden institucional del Estado Burgués bajo agudas presiones de los grupos de poder local y global, del gobierno norteamericano y de los organismos económicos multilaterales?

La vuelta al orden constitucional con Palacios abrió para la clase media una especie de tregua política vista a las elecciones presidenciales del 2006, se puede decir que este período de transición alivió el horror al vacío, enfrió el miedo que la catástrofe política institucional había provocado en los ciudadanos. Se reactivaron las esperanzas de componer el deteriorado sistema político burgués, a pesar de que los escándalos de corrupción continuaron en todas las poderes del Estado.

La presión de las demandas de los sectores populares desmintieron las promesas del gobierno interino y nuevamente se reactivaron las movilizaciones indígenas contra el neoliberalis-

mo y sus Tratados de Libre Comercio. Es difícil saber que sentían los sectores populares, quizás el miedo que en éstos también se congeló se descongelaba rápidamente y poco a poco la falta de fe en el Estado crecía nuevamente, ahogándose en una frágil esperanza de las elecciones próximas. Bueno, no se si en los sectores populares haya miedo a la falta de institución estatal, nunca les sirvió de mucho a no ser como aparato de represión de las luchas, sin embargo a nivel simbólico-ideológico, si creen en su posibilidad de asistencia social.

Rafael Correa, ministro de Economía del Gobierno Interino, quien fue destituido del cargo por discrepancias en algunas decisiones que modificaban la política económica neoliberal continuada por Palacios, se lanza de candidato presidencial con el apoyo de lo que puede definirse como un movimiento ciudadano nacionalista compuesto básicamente por sectores medios, pequeños empresarios, organizaciones barriales y una élite intelectual tecnoburócrata, básicamente de la Sierra. Sus posiciones contra la política económica neoliberal manifiestas en su breve paso por el Ministerio de Economía, su oposición al viejo sistema político de partidos, tan desgastado ante la mirada de la sociedad, su apoyo a la realización de una asamblea constituyente (oferta de campaña), y la necesidad de la gente de inventar algo que le devuelva la fe y la aleje del vacío, del caos, de la contradicción irresoluble, logrando para Correa un apoyo mayoritario de la sociedad ecuatoriana en las elecciones de noviembre del 2007.

## 2. Transferencia

Correa se presentó como la posibilidad de recuperar la fe en la decaída institucionalizada burguesa. Organiza un discurso en torno a la ciudadanía, con el cual interpela a esa multitud ávida de referentes políticos. Correa pone a circular "la carta" que contiene el signifiante ciudadano y todo aquel que se reconoce en éste inmediatamente entra a la red simbólica que se reestructura en la perspectiva de reencauchar al Estado Nacional, a través de una Asamblea Constituyente. Sin duda, no solo la clase media, sino varios sectores de la clase trabajadora obrera y campesina se

reconocen en este llamado, en otras palabras, se cosen al significativo ciudadano.

La rápida respuesta de la multitud al llamado simbólico que hace Correa se puede explicar por la situación de desamparo político-institucional en el que se encuentran. Enfrentada al caos institucional, la población realiza una transferencia, encarga la responsabilidad política a Correa, se puede decir que entrega el poder que logró en las movilizaciones callejeras y que podía ser sostenido y consolidado en la instancia de las asambleas populares, que curiosamente se debilitan con la entrada de Correa al Gobierno. Desde el psicoanálisis la transferencia explica el mecanismo por el cual el sujeto abocado a la evidencia de su crisis existencial (según Fromm: estar separado de la naturaleza y fatalmente atado a sus leyes) descarga la responsabilidad de resolverla a una instancia trascendente: Dioses, ídolos, maestros, etc., con lo cual tranquiliza su angustia. Correa parece jugar el papel del Maestro, una especie de elegido que promete restaurar el orden simbólico y tapar el abismo político que se abría en los pies de la población. De no ser así no se explica la ciega confianza que gran parte de la población depositó y sigue depositando en el actual presidente, confianza que no pasa por un análisis racional de la propuesta política del presidente ni por una participación directa en el proyecto gubernamental, sino por una necesidad de creer, fe que le asegura un piso donde depositar y calmar su angustia.

La aceptación y respaldo que la "ciudadanía" da a Correa pasa por una identificación con su discurso, por medio del cual performa una realidad imaginaria que ofrece seguridad política y social sobre la base de negar el pasado dominado por la partidocracia neoliberal que condujo al caos. Una realidad imaginaria que cobra mucha más importancia que la realidad social concreta, simplemente porque la ciudadanía quiere creer. El vínculo entre los ciudadanos comunes y el ciudadano presidente es un vínculo que mínimamente se asienta en las políticas concretas que éste último pudo poner en marcha, pues si revisamos este primer año de gobierno no hay cambios cualitativos en la política económica y social, sino, más bien, una continui-

dad con el desarrollo de la sociedad capitalista, incluso en su versión neoliberal. Lo que se puede observar es un cambio en el discurso que empieza a configurarse en torno al significativo "revolución ciudadana", "Socialismo del Siglo XXI", "Socialismo de los ciudadanos".

A los "ciudadanos" les importa más asegurar su existencia política imaginaria que los cambios económico-sociales, pues el significativo ciudadano en sí mismo es un significativo que acolchona una fantasía imaginaria que tapa el vacío substancial que la categoría proletariado destapa y que en el caso de los Andes es la categoría de lo Indio. No es gratuito que el movimiento indígena del país haya sido invisibilizado en el proceso Correa, por principio histórico y social el indio no se reconoce en la categoría de ciudadano; en la periferia andina dependiente el indio no puede ser ciudadano, el indio es el proletario, pues lo indio revela la imposibilidad estructural de la sociedad moderna capitalista en los andes. Al Indio, categoría política que hace referencia a la clase trabajadora integrada y excluida y a los sectores expulsados, no le asusta el vacío político institucional, ya que nunca fueron partícipes de la estructura política burguesa oligárquica, nada pierden con esta pérdida solo pueden ganar una posibilidad de existencia positiva. Cuando los trabajadores excluidos y expulsados se dan cuenta que dentro de este orden social no son nada entonces se saben proletarios, se saben indios y solo entonces saben que nada tienen que perder si esta sociedad y sus instancias políticas se derrumban, solo entonces saben que no tienen porqué defender esta institucionalidad política donde no existen, donde no participan.

A diferencia del indio (proletario) asumido como tal, el indio no asumido y la clase media mestiza cosida a los referentes de la burguesía necesitan defender la institucionalidad política donde creen existir de forma positiva. En el caso de los indios no asumidos existe un extrañamiento radical de su condición material de clase y en el caso de la clase media mestiza su enajenación tiene un soporte material que le da el lugar que ocupa en el aparato burocrático moderno y en las áreas de servicio. Tanto el indio no asumido como la clase media mestiza, y sobre todo ésta

última, se horrorizan ante la retirada del Estado Nacional porque subjetivamente para los indios no asumidos y materialmente y simbólicamente para la clase media el Estado representa un soporte de su existencia política y social. Por esta razón es que estos sectores sociales realizan la transferencia por la cual encargan su destino político a Correa, quien les asegura restablecer su Estado nacional.

### 3. Invisibilización de los movimientos sociales de izquierda

Es curioso, todas las reivindicaciones populares recogidas como bandera de lucha del movimiento indígena son apropiadas por Correa y convertidas en promesas de su campaña electoral. Yo diría, más bien, que hubo una expropiación del discurso de las organizaciones populares por parte de Alianza País, expropiación en la medida en que no se reconoce el importante rol político que las organizaciones y movimientos sociales de izquierda (sobre todo de las organizaciones indígenas) tuvieron en el arrinconamiento político de la derecha oligárquica del país. Hoy resulta que el movimiento indígena y los otros movimientos sociales, por decisión del presidente, no tienen ninguna importancia política e histórica en el proceso que se abrió a partir de la derrota de Lucio Gutiérrez.

Se declara una "revolución ciudadana" en la cual, por obvias razones políticas y conceptuales, las organizaciones y movimientos populares de izquierda no tienen lugar, a no ser sobre la base de su disolución. La "revolución ciudadana" es la revolución de los ciudadanos no de las organizaciones políticas, la que se compone de la suma de "voluntades racionales individuales" no de sujetos políticos organizados. La "revolución de los ciudadanos", quienes en un acto libre y racional encargan la tarea de hacer la revolución a un gobierno y específicamente a un individuo racional: "el ciudadano presidente". "Revolución ciudadana" que implementa una democracia burguesa liberal reencauchada, reciclada, revisada; una democracia en la cual nuevamente quedan fuera de la participación política directa la sociedad organi-

zada y no se diga el pueblo no organizado. El argumento del gobierno y de los sectores aliados a él es que no ha habido organización política de izquierda, argumento tramposo, pues aunque hoy golpeados y en crisis son los movimientos sociales, y ante todo del movimiento indígena y campesino del país, los que han recogido y han impulsado la lucha popular por la transformación social. Es ingenuo pensar que los logros políticos conseguidos en la lucha contra el capital nacional y transnacional es resultado de la mente brillante de cuatro ciudadanos.

La ausencia de participación política real de la sociedad busca ser invisibilizada con la mediatización y espectacularización de las apariciones públicas de Correa, con la concentración del poder de decisiones en su persona y su pequeño equipo técnico y sobre todo con la supervaloración del mismo. Por otro lado, la intención de concentrar a las organizaciones populares dentro del Estado para administrar y controlar la lucha popular dentro de los lineamientos políticos del reencauche social-demócrata, pretende garantizar la revolución sin revolución, la revolución Light. Aquellas organizaciones político sociales que no aceptan los lineamientos de la revolución ciudadana son ahora tildadas de "grupos terroristas", "ambientalistas románticos", "izquierdistas infantiles" para quienes habrá "tolerancia cero". Ahora el presidente dice que no permitirá ningún "terrorista" que se oponga al desarrollo del país enmarcado dentro del modelo de extracción y explotación de recursos. Que fácil le resulta al presidente juntar un discurso de "izquierda radical" con un discurso de derecha fascista como es el del terrorismo, quizás sea resultado de los tiempos postmodernos donde los "viejos antagonismos de clase" ya no cuentan.

#### 4. Correa el Guía

Ante el vacío político institucional, todos aquellos que respondieron al llamado de Correa lo configuraron como su "salvador". Después de las continuas frustraciones cuyo punto culminante fue la traición de Gutiérrez, la gente urgía de un salvador que recubra la inconsistencia del Estado, un salvador que

salve el Estado, y ese fue Correa. Correa asume el gobierno como el "elegido", aquel que va a resolver el caos institucional en el que hemos caído, *él y nadie más que él*; el presidente y su equipo de tecno-burócratas *sin* filiación política ni ideológica. El Mago y sus hechiceros, solo ellos parecen poseer el *saber mágico* que va a resolver la crisis política que azota al país, no necesitan de las organizaciones y movimiento sociales para hacer su "revolución ciudadana".

Parece ser que más allá de la retórica de la participación, Correa quiere afirma su imagen de Guía político, imagen mística que no abre procesos de politización y participación real de la sociedad. Su discurso convoca a una falsa participación, ya que el ciudadano no organizado, solo puede delegar su poder a un representante, no ejercerlo de manera directa. La participación a la que convoca el presidente es la participación del individuo atomizado del mundo postmoderno, de ninguna manera es una convocatoria que busque abrir procesos de alianza política con las organizaciones y movimientos sociales o a abrir procesos de organización y participación política popular autónoma. Alianza País es una amalgama uniforme de individuos y agrupaciones sociales, que van desde sectores de izquierda no organizada hasta la derecha reciclada y alejada de la desprestigiada derecha oligárquica.

Es importante observar el papel preponderante que los técnicos tienen en la transformación del Estado Nacional al Estado Técnico Administrativo en la era del capitalismo multinacional. La hegemonía de la razón científico tecnológica en la vida social produce un profundo proceso de despolitización en la medida en que los asuntos políticos, que tienen que ver con el complejo de intereses sociales mayoritariamente enfrentados, devienen en asuntos de administración. Es así que el Estado, instancia política por excelencia termina siendo un aparato de administración pública de recursos sociales. Sospecho que a diferencia de lo que el discurso radical de Correa dice, la forma en que se está reorganizando el Aparato Estatal indica su reconfiguración técnica-administrativa. Antes de la llegada del nuevo gobierno, el Estado Ecuatoriano no era sino un aparato político de

control de las clases dominantes contra las clases populares; era claro para el país la pertenencia clasista del Estado Ecuatoriano, todos sabíamos o intuíamos que la derecha oligárquica disponía del Estado a diestra y siniestra para la realización de sus negocios. Ya nadie creía en la fantasía de la representación del interés general y fue esa claridad lo que hizo entrar en crisis la institucionalidad burguesa estatal. Quizá por esto el pueblo perdió la fe en los gobiernos y en el congreso, quizá por esto quería que se ¡¡vayan todos!!.

Descubrir el carácter de clase del Estado Nacional requiere de largos proceso de lucha social al interior de los que se construye la conciencia política de los sectores subalternos. Cada lucha popular, cada levantamiento indígena que enfrentaron el poder de las clases dominantes destruyeron la malla ideológica con que la burguesía ha construido la identidad imaginaria de su Estado. Sin fantasía ideológica comprendimos que el Estado Nacional no expresa ni de lejos los intereses de las mayorías empobrecidas de este país. La comprensión de la falacia del Estado es sin duda un avance en la lucha política que abre la posibilidad de atravesarlo desmantelarlo e ir hacia la construcción de un lazo social distinto que funde otra manera del ser social y político. Está claro que atravesar el Estado Nacional y no atraparse en él es un asunto complicado y difícil, sin embargo intentar reconstruirlo es no entender que el problema del estado no es su contenido, sino su forma misma.

La presencia de la tecnoburocracia en el seno del Estado cubre su inconsistencia dándole una nueva identidad imaginaria que se articula a través del discurso de la objetividad del conocimiento científico tecnológico. La técnica es el nuevo significante de acolchonamiento que permite reinventar al Estado como espacio neutro donde confluyen los intereses sociales para ser resueltos por medio de la administración técnica de los recursos sociales. No es gratuito que desde hace algún tiempo las llamadas "Secretarías Técnicas" proliferen al interior de los Estados Nacionales, unidades de decisión política que articulan la institución nacional con los organismos internacionales de control. El discurso tecnoburocrático no esconde los intereses políticos, no es

un metalenguaje, su estructura, su forma expresa los intereses del capital multinacional.

Es curioso que muchos de los técnicos que trabajaron en el gobierno de Gutiérrez y de Palacio sigan trabajando en el Gobierno de Correa. Se quiere explicar esta curiosa continuidad diciendo que estos funcionarios no son políticos, que los cargos que ocupan no son políticos, que las secretarías técnicas no son instancia políticas, sino que son cargos e instancias de ordenamiento técnico. Creer esto a estas alturas de la lucha política es por decir lo menos ingenuo, sino cínico. Lo más cercano a la liquidación de lo político es la implementación de la gestión técnica en los asuntos de orden público, eso ya lo sabemos desde la época de Marcuse. El discurso técnico es una "magia" que invisibiliza los antagonismos de clase creando la ilusión de que las demandas sociales que responden a intereses concretos de los sectores sociales enfrentados se resuelven con un manejo técnico que administre los recursos en disputa. Realmente lo que se oculta es que el tema de las demandas sociales de los sectores empobrecidos solo se resuelve liquidando las relaciones de explotación sobre la que descansa este orden social y no con proyectos de desarrollo técnicamente concebidos para "paliar" los niveles de miseria y contener los procesos de lucha popular.

Ahora parece ser que la solución a los problemas políticos y sociales del país se resuelve con la organización técnica del Estado, cuando desde hace mucho se sabe que las profundas contradicciones que articulan la sociedad ecuatoriana no se resuelven con la magia de la técnica, sino con la transformación de las relaciones sociales existentes.

Debemos tener mucho cuidado en depositar las decisiones políticas en un "maestro" o en grupo de "técnicos-magos", la política es la participación directa de las personas en los asuntos del mundo en el que quieren vivir, cualquier tipo de representación, sea la liberal burguesa o la mítica idolátrica es un proceso de transferencia y por lo tanto de enajenación del poder que cada uno tiene para construir en colectivo la sociedad que desea.

## 5. Una revolución sin revolución

Todos los levantamientos indígenas-populares a los que hemos asistido en los últimos veinte años han sido momentos pre-revolucionarios. La última gran movilización de abril que terminó de abrir la posibilidad de una transformación que se suponía iba a ponerse en marcha con la llegada de Correa al gobierno, se entendía que el gobierno actual podía significar una primera revolución; digo revolución por cuanto Correa no ganó las elecciones del 2007 gracias a su ofrecimiento de campaña, sino porque una subjetividad social y política desencantada del viejo orden y deseosa de transformaciones, que vino configurándose en los procesos de lucha prevolucionarios, lo "eligió".

Una primera revolución que implica poner en marcha un proceso por el cual el viejo orden político sea negado dentro de su misma forma política ideológica, es decir dentro del Estado Nacional. Este proceso exige la participación directa de los sectores sociales subalternos en las decisiones que el gobierno lleve adelante en la perspectiva de liquidar, en un segundo momento, la forma misma del Estado. Solo la negación de la forma del Estado conlleva una verdadera revolución. Si no está en el horizonte político del Gobierno de Correa la negación del Estado no está en su horizonte la revolución, no hay radicalidad en su praxis política. La puesta en marcha del proyecto revolucionario no tiene postergación, cualquier aplazamiento es el signo indiscutible de que no hay proyecto revolucionario, sino reformas que al fin de cuentas son reencauches del viejo orden. Según dice Zizek sobre Lenin:

*la noción deificada de la necesidad social (no debe arriesgarse la revolución demasiado rápidamente; hay que esperar el momento correcto, cuando la situación esté madura con relación a las leyes del desarrollo histórico: "es demasiado temprano para la Revolución Socialista, la clase obrera no está madura todavía") o bien la legitimidad (democrática) normativa (la mayoría de la población no está de nuestro lado, de modo que la revolución no sería verdaderamente democrática.)"*

La revolución no requiere permiso de ninguna entidad más allá de la subjetividad deseante de transformación, de nin-

gún mecanismo “democrático burgués” (referéndum, plebiscito, etc.) El acto revolucionario se da justamente en la desarticulación y negación del orden vigente, no necesita garantías ni legitimidad por fuera de su posibilidad. *“el temor de tomar el poder prematuramente”, la búsqueda de garantías, es el temor ante el abismo del acto.* El temor al abismo del acto es propio de la clase media que cree tener una oportunidad de existencia en el orden burgués-capitalista, de ahí que sea una clase por excelencia “oportunistas”. El proletariado, el indio, que sabe que su existencia está negada en esta sociedad no tiene temor al abismo del acto, no tiene temor a realizar el acto.

Volviendo a la primera revolución, que ya lleva en su germen la segunda y definitiva, debemos decir que la liquidación del viejo orden político pasa por cambiar radicalmente la ideología burguesa que se materializa en la manera de hacer política. Pensemos en la lógica de la representación, la espectacularización, la concentración de poder, la verticalidad, el clientelismo, la idealización, la personalización de la política, etc. Lo que se puede observar en estos seis meses del Gobierno de Correa es la continuidad de estas prácticas política, que no es otra cosa que la continuidad de la ideología burguesa oligárquica que ha gobernado históricamente este país. Sino se niega estas prácticas, que es el contenido del Estado burgués, no es posible de ninguna manera avanzar en la liquidación de la forma, ya que ésta se sostiene en estos contenidos.

## 6. El Socialismo del Siglo XXI un socialismo de Ipod

A un año y más del Gobierno de Correa se perfila el carácter de su apuesta política o los contenidos del anunciado Socialismo del Siglo XXI. Recuerdo que cuando el gobierno lanzó la idea de Socialismo del siglo XXI había una imagen de Karl Marx con un Ipod, en ese momento solo me resultó una imagen poco o nada estética, ahora con las últimas acciones del gobierno donde se clarifica el carácter de su “Revolución ciudadana”, esa triste imagen postmoderna cobra sentido. Siempre he pensado que la fuerza de la teoría revolucionaria marxista responde a dos

cosas: 1. al peso histórico de las demandas y voluntades humanas en su largo caminar y a la radicalidad de la transformación civilizatoria que reclama; en este sentido Marx no es una imagen, sino un símbolo de esa fuerza humana, fuerza telúrica que he visto en los rostros de los indios de estos Andes ecuatorianos. Marx con un Ipod: qué será lo que escucha?Cuál es la música que lo vuelve liviano, que le quita peso y fuerza a sus ideas, a su pensamiento revolucionario? Tan liviano que es fácil jugar con su pensamiento, es fácil hablar de un socialismo con propiedad privada, de un socialismo de mercado, de un socialismo en noviazgo con el capitalismo. En la época de la "modernidad líquida" todo es posible diría Bauman.

Creo que es urgente sacarle a Marx el Ipod así perderá la levedad y caerá en la tierra, en lo profundo de la tierra donde su pensamiento nuevamente eche raíces en la voluntad humana e inflame su potencia creativa. Hay que volver al Marx, al hueso duro atrancado en la garganta del Capital, sea éste norteamericano o chino-brasileño.

Por último, ese permanente desdén político que el gobierno de la revolución ciudadana hace de las organizaciones indígenas parece ser parte de su comprensión del Socialismo del siglo XXI. La construcción de un Socialismo sin indios es apostar a un proyecto social de blanqueamiento político y cultural, un proyecto que continúe la ya larga tradición de racismo, segregación y exclusión que ha marcado la historia de este país. Un Socialismo de ciudadanos no es un Socialismo, porque el Socialismo es esa fase histórica donde se aniquilan las clases sociales, y se abren las puertas hacia la construcción de una sociedad, no de ciudadanos, sino de personas y pueblos distintos y diversos que convivan en relaciones de equidad, complementariedad, reciprocidad, etc., por fuera de las lógicas mercantiles del capitalismo, al menos ese era el deseo de los pueblos que creían en el socialismo.

La revolución ciudadana es una revolución sin revolución, una revolución blanda diría Zizek, una revolución que no quiere tomar en cuenta las reivindicaciones histórico estructurales de los oprimidos como es el caso puntual del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado Ecuatoriano. El reconoci-

miento del Estado Plurinacional no se reduce a una declaratoria escrita en la nueva constitución, sino a una voluntad política de transformar las viejas estructuras clasistas y etnocéntricas del Estado Nacional. Es fácil aceptar un significante, en este caso el de Estado Plurinacional si, al igual que el de Socialismo del siglo XXI, va a servir de punto de articulación para el reencauche de la ideología dominante que dé continuidad al proyecto de dominación capitalista en una versión actualizada. La aceptación del carácter Plurinacional del Estado que implique una transformación de las relaciones y las estructuras del Estado Nacional es de hecho la destrucción del mismo, lo que involucra una transformación profunda de las estructuras económico-políticas de explotación, exclusión y dominación que han articulado a la sociedad ecuatoriana. No se si sea este el proyecto de una revolución ciudadana cuyo sujeto es el ciudadano y cuya forma política es el Estado Liberal Burgués, así sea, en su versión de Estado Social de Derecho.

La exigencia de la construcción de un Estado Plurinacional es primero y fundamentalmente una reivindicación de justicia histórica con nosotros, pueblos campesinos e indígenas excluidos y explotados por algo más de quinientos años. El Estado Nacional ecuatoriano periférico y dependiente ha sido desde sus inicios una institucional aparente, anacrónica e inacabada que no responde a la realidad social heterogénea, dicotómica y conflictiva de la sociedad ecuatoriana. Una forma institucional estructuralmente excluyente que dejó al margen de su competencia a los pueblos y nacionalidades originarias e históricas. Un Estado que negó de principio las formas y estructuras institucionales de esos pueblos a no ser si había la posibilidad de refuncionalizarlas a la lógica de la modernidad capitalista.

Como se explicó en la primera parte de este análisis, el Estado Nacional ecuatoriano entró en una de sus mayores crisis, sino la mayor, en el 2006, crisis expresada en la derrota del Gobierno de Lucio Gutiérrez y la deslegitimación total del poder legislativo y el poder judicial. Asistimos pues a la ruptura de la relación entre el Estado (institución política) y la sociedad (formación social), una relación que como se ha visto es históricamen-

te frágil y compleja. La forma del estado uninacional, monocultural, excluyente, autoritario y etnocéntrico fue definitivamente trascendida por la formación social diversa, heterogénea y compleja, no es posible que ahora se lo quiera reeditar y perder la oportunidad histórica de trascenderlo.

Por otra parte y ligado a lo dicho en las últimas líneas, habría que considerar que la construcción de un Estado Plurinacional puede ser un ensayo histórico del contenido del Socialismo en los Andes. Podría quizás pensarse que el Estado Plurinacional es parte de un proyecto social de descolonización del Estado ecuatoriano donde se supere la histórica escisión entre la institucionalidad política y la formación social, transformación que pasa necesariamente por la construcción de una institucionalidad política que exprese la complejidad de la formación social del Ecuador. Esto exige reconocer la existencia de las 14 nacionalidades y pueblos indígenas como partes componentes de la sociedad ecuatoriana, reconocimiento que conlleva el asumir la diversidad de instituciones políticas, las múltiples formas de ejercicio de la democracia y de participación política, la diversidad de saberes, las distintas cosmovisiones y concepciones del mundo, los diversos modos de producción, etc. Es decir, la descolonización del Estado es posible sobre la construcción de una forma estatal que se levante y exprese la complejidad misma de la institucionalidad diferenciada, que se construya y se reconstruya en la emergencia permanente de lo múltiple, lo diferente, lo mezclado, lo cambiante.

Un Estado que al negar su carácter homogéneo, uniétnico pueda mostrar no solo lo diverso, sino el carácter diferente, disímil y antagónico de los intereses sociales. Un Estado que sea en sí mismo el espacio no solo de negociación, sino de sinceramiento de los conflictos económicos, sociales, políticos, culturales. Un Estado que no excluya ni subordine a ningún sector social para evitar el conflicto, sino que abra espacios de negociaciones políticas reales. Un Estado que no pretenda ser la síntesis política de una sociedad diversa y conflictiva negando el carácter plural y heterogéneo de la misma, sino que promueva la negociación y superación del conflicto sobre la base de garantizar

la participación directa de los distintos sectores sociales organizados que se encuentran implicados en la construcción de un proyecto común en lo diverso. Un Estado con una red institucional plural abierta a las distintas formas de ejercicio práctico de la política y realizadas por los distintos y diferenciados sujetos sociales organizados. Al mismo tiempo abierto a procesos permanentes de conflicto y negociación, abierto y abriendo escenarios de conflictos y contradicciones sociales a ser tratadas. Un Estado que por último acepte su derrota y abra paso a nuevas y creativas formas políticas que superen a las actuales, trascendiéndose a sí mismo

Un estado que sea un ensayo histórico en los Andes que de la posibilidad para que la clase-etnia oprimida pueda destruirse como tal, es decir como oprimida y excluida y destruir a la clase-etnia dominante, como excluyente y dominadora y abrir el paso a un proyecto histórico de la humanidad diversa sin relaciones de dominación. Una sociedad sin clases y sin dominación étnica. Quizás el Gobierno de la revolución ciudadana no quiere la estructuración plurinacional de la institucionalidad del Estado porque se descubriría los profundos conflictos sociales de clase que conllevan a la dominación étnica, se revelaría la diferencia antagonica que su revolución ciudadana quiere ocultar a través del reencauche de una Estado de clase, que si no es destruido bien puede llamarse Estado Plurinacional si esto afecta a su estructura básica de explotación. Está claro que el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad en la estructura del estado pone en riesgo la base misma del Estado nacional de clase y los intereses de los grupos de poder hegemónico que han manejado el mismo.

Es importante señalar que la implementación efectiva de un sistema político que reconozca la plurinacionalidad al interior de un Estado, implica que este Estado no sea de clase, esto a su vez supone la transformación de la sociedad, de una sociedad basada en la explotación y la dominación a una sociedad de justicia e igualdad; esto si podría acercarse a la voluntad de construir el Socialismo, no la reedición del Estado Liberal en la periferia. El tema central de o plurinacional no es lo cultural si ésta

dimensión no comprende la reproducción de la vida toda de los pueblos y nacionalidades oprimidas. Si la cultura está cosificada como rituales sígnicos folclorizados y desarticulados de la reproducción material y simbólica de un pueblo, no es problemático reconocer su existencia dentro de un Estado de clase; pero si lo cultural involucra formas y modelos económicos que pongan en riesgo las lógicas de acumulación de capital el tema rebasa la esfera de la política formal e institucional. Quizás esto pueda explicar la negativa del Gobierno de la revolución ciudadana de aceptar la consulta previa e informada y el derecho a veto que todo pueblo tiene cuando se trata de defender su territorio y con él la garantía de la reproducción de la vida.

## 7. Sinceremos el proyecto de la revolución ciudadana

La trampa de la democracia liberal consiste en el ejercicio de la libertad de elección política, pues ésta es posible siempre y cuando la opción que se elija sea la "correcta"; para el Ecuador de la época de Alianza País la opción "correcta" es la de la "revolución" ciudadana. En el marco de estas coordenadas políticas burguesas, el movimiento indígena, como los otros sectores populares de izquierda organizados, tiene la libertad de optar, digamos de participar en el proyecto político del país, siempre y cuando lo haga correctamente, y lo correcto parece estar definido por los lineamientos de la participación ciudadana promovida por el nuevo régimen. Si se opta por otra cosa, digamos por un proyecto no de reformas burguesas, sino de transformaciones sociales, entonces se pierde de inmediato la posibilidad de la participación. En definitiva, lo que el Gobierno de la "revolución" ciudadana ofrece al pueblo no es una opción sino una elección forzada, pues si no se escoge su propuesta política se pierde la opción misma de escoger. Negarse a participar del proyecto de Alianza País implica no participar en el proceso político que vive el país, y pasar de inmediato a ser considerado un enemigo de la "revolución ciudadana", incluso acusado de ser parte de la vieja derecha oligárquica. De hecho, el Presidente ha tenido el atrevimiento de acusar a dirigentes indígenas y populares, comprome-

tidos por décadas en las luchas sociales, ser parte de la derecha, solo por no escoger lo "correcto", lo que estaba preparado para la organización indígena y popular en el proyecto tecno burócrata de la revolución ciudadana. Parece ser que desde la perspectiva del régimen de Correa, los sectores populares de izquierda organizados, que no optan por la elección "correcta", están negados de participar en la vida política del país.

Ahora bien, cuando el gobierno era de la derecha asumida, la cosa estaba clara, se sabía exactamente que el pueblo organizado y aún más la izquierda no tenía ninguna posibilidad de diálogo con el poder, de hecho nunca se buscó el mismo, se sabía con certeza que el camino no era el diálogo, pues no hay diálogo cuando no hay sujetos de diálogo mutuamente reconocidos, y ni la derecha en el poder estatal ni la izquierda por fuera de él se reconocían como interlocutores de un diálogo. En esta medida, el pueblo se organizaba para resistir, enfrentar y detener los planes políticos, económico, ideológicos de la derecha; eso y no otra cosa sucedió en la dos últimas décadas, antes del último Gobierno, el pueblo organizado y básicamente el movimiento indígena enfrentaron el Plan Colombia, la base de Manta, las política neoliberales, el TLC, etc.

Con un Gobierno social demócrata, autodeclarado de izquierda, la cosa es diferente, no hay claridad política. Desde hace mucho que se sabe que la táctica política y las concepciones económicas de la social democracia están marcadas por el conformismo y que nada ha corrompido tanto la lucha del pueblo como la idea de que están avanzando dentro de la lógica del capital.<sup>24</sup> Estoy pensando en las declaraciones del Gobierno sobre el progreso económico y la mejora en el nivel de vida de los ecuatorianos más pobres en base a los mega proyectos como la Manta-Manaos, la explotación minera y petrolera, las hidroeléctricas, la "seguridad alimentaria" vía negociación con las grandes cadenas alimenticias, el mandato agrario presentado por el gobierno y aprobado por la ANC, la ley minera, etc. Parece que el discurso socialdemócrata no ha cambiado desde el tiempo en que Benjamín criticaba los ofrecimientos de la socialdemocracia basados en el desarrollo y el progreso técnico-industrial. Está cla-

ro que dentro de esta apuesta social no hay cabida para las propuestas que vienen desde los movimientos sociales y sobre todo desde el movimiento indígena, cuyo proyecto se basa en un cambio de modelo económico propuesto en su concepción de soberanía alimentaria, la misma que implica una nueva relación con la naturaleza que no acepta la visión instrumentalizada de la misma, presente en el discurso del progreso técnico. Sin embargo, el discurso de la socialdemocracia está abierto a un "diálogo ciudadano", en el que pueden participar los ciudadanos, no el pueblo y menos los indios.

Sincerémonos, el proyecto de Alianza País no es una revolución, quizá pueda llegar a ser una reforma socialdemócrata, no confundamos los imaginarios ideológicos. La ideología social-demócrata, en cualquiera de sus versiones, es una ideología de la burguesía y de ninguna manera apunta a superar el modelo económico capitalista de acumulación y concentración de la riqueza social. Siendo así, es necesario tomar distancia crítica con el discurso del Gobierno, más aún si éste está permanentemente interpelado desde la democracia liberal.

El nuevo gobierno habla mucho de democracia, de ampliación de la democracia, pero entendamos que: *"No hay democracia sin un elitismo oculto, presupuesto. La democracia es, por definición, 'no global'; debe basarse en valores y/o verdades, que no puede seleccionar 'democráticamente'."*<sup>25</sup> Ahora bien, el problema de la democracia que propone la "revolución ciudadana" no es la presencia de dicho grupo de élite oculto, sino su composición. Una cosa es que ese grupo de élite este conformado por tecnoburócratas y una emergente burguesía y otra, muy diferente, es que sea la expresión de una alianza de organizaciones populares de izquierda. De hecho, realmente no es un problema, ya que la democracia propuesta por un proceso político que se autodefine como "revolución ciudadana" no podría ciertamente tener en su núcleo a sectores populares de izquierda, sino a grupos de ciudadanos preparados en la administración técnica del Estado y al servicio de la burguesía en sus distintas formas. Pero entendamos que es así y no creamos que este proceso que vive el país sea una revolución popular y menos que vaya hacia el Socialismo. La de-

mocracia de la revolución ciudadana, entonces, no re-presenta los intereses de todo el país, es decir del conjunto preexistente de los diversos intereses y opiniones de los ecuatorianos, sino que constituye, a través de su discurso ciudadano, intereses y opiniones a los cuales las personas van a adherirse y, de esta forma, impulsar el proyecto de una nueva burguesía. El asunto está en saber que esos intereses y opiniones ciudadanas no son lo que la izquierda ha venido buscando y en esa medida hay que saber abrir aguas para no abandonar la utopía, aquella que nos mueve a construir otro mundo, ciertamente otro y NO la reedición del mismo. Es necesario que la izquierda junto a todo el movimiento popular replanten su proyecto; hacia dónde queremos ir y cuáles son las alianzas, tácticas y estratégicas, que se deben llevar a cabo tanto en el país como en el contexto regional y mundial.

## 8. Un caduco modelo desarrollista

Hay quienes sostienen que el proyecto de Alianza País se inscribe en la vieja propuesta desarrollista (nacionalista) de los años 60s. Quizás en parte tienen razón y quizás justamente está allí el problema, pues sobre la base de este análisis se propone el apoyo al proyecto de Gobierno como paso necesario para ir hacia la revolución socialista cuya antesala "necesaria" es el desarrollo del capitalismo industrial en la periferia subdesarrollada. Ante esta visión sería bueno detenerse en el siguiente análisis de la coyuntura política-económica actual del Ecuador.

Aceptando el carácter subdesarrollado de la estructura económica de la sociedad latinoamericana y particularmente la Andina, y desde una visión keynesiana de la economía se propuso, en los años 60, un programa de desarrollo que buscaba pasar de la economía primario-exportadora y agroimportadora dependiente del mercado mundial a una economía industrial de capital nacional e internacional. Sobre la base de la renovación técnica y científica se pensó llevar adelante el proceso de sustitución de importaciones, es decir un proceso de industrialización nacional acompañado de la ampliación del mercado interno para la creciente producción. En esta fase his-

tórica de desarrollo, al igual que ahora, el capital extranjero era considerado necesario por la insuficiencia del ahorro interno. Pensemos en los discursos del presidente Correa cuando plantea la necesidad del capital extranjero para la explotación minera en el Ecuador, cuando dice que el país no tiene ni el capital ni la infraestructura para la explotación minera "tan urgente" para el desarrollo de la nación, o cuando sus acólitos sostienen que *aprobaron la ley minera*, en la cual se da luz verde a concesiones a empresas transnacionales, *con el "dolor del alma" en función del "progreso de la patria"*.

Es importante señalar que en cuanto a la política agraria, la visión desarrollista está en contra de toda reforma en el régimen de propiedad de la tierra, así, el crecimiento de la productividad en el sector rural será consecuencia del desarrollo industrial energético y de infraestructura, no de la eliminación de la propiedad privada sobre la tierra. Es el mejoramiento de la técnica productiva, vía incremento tecnológico y de inversión de capital, la condición para el aumento en rendimiento productivo agrario. Podemos observar que una de las políticas del Gobierno de Alianza País, expresadas en el mandato agrario y pronto de seguro en la ley de soberanía alimentaria, donde, por cierto, no se topa el tema de la reforma agraria y menos del régimen de propiedad, se basa en el impulso de la tecnología productiva agraria y básicamente en lo que tienen que ver con los insumos agroquímicos para la producción agraria en su versión negocio o empresa. Esta propuesta, que desde la visión del desarrollismo encuentra límites en la forma de la propiedad, en el caso del Ecuador más que en la propiedad privada oligárquica-terrateniente, en la medida en que no ha sido topada por este régimen, encuentra su límite en la propiedad comunal indígena. Propiedad comunal que conlleva una concepción de la relación hombre-naturaleza que implica otras tecnologías productivas distintas a la homogenización y diversificación de la tecnología productiva industrial de las agroempresas. Límite que se encuentra en la propia Constitución recientemente aprobada en lo que se refiere al derecho de los pueblos ancestrales sobre su territorio, límite que ya se a hecho sentir en la oposición del mo-

vimiento indígena campesino al proyecto de extracción minera a cielo abierto y al mandato agrario, cuyo modelo son los agro negocios en alianza comercial con las industrias nacionales y extranjeras de los agroquímicos. Como en el mismo programa desarrollista de los años 60s estaba previsto, cualquier límite a su proyecto será eliminado incluso con el uso de la violencia estatal, expresada hoy en la criminalización de la lucha social; basta mirar la actuación del Gobierno frente a la resistencia de los campesinos en contra de la Ley Minera. Hay que aclarar que, en últimas declaraciones del régimen sobre el tema agrario ligado a la ley de soberanía alimentaria, se ha topado el tema de las "tierras improductivas" que habría que intervenir para dar paso al desarrollo agrario y sorprendentemente a lo que se esperaría de una visión desarrollista progresista, las tierras improductivas que podría ser expropiadas no son los grandes latifundios de la oligarquía terrateniente, sino los pequeños minifundios de los campesinos. Declaración que obviamente va encaminada a legitimar el apoyo y el impulso a las grandes cadenas de agro negocios (PRONACA-SUPERMAXI) en desmedro de la pequeña y mediana producción campesina-indígena que, de los que se puede observar, será objeto de expropiación de tierras.

En la propuesta desarrollista el rol del Estado es fundamental en la regulación y control de la vida económica; en el plano interno promueve sin mayor interferencia la iniciativa privada del empresario "innovador" - sea nacional o extranjero, siempre y cuanto sea un elemento de crecimiento económico - y en el plano externo busca regular y controlar el comercio para proteger la industria nacional. El actual régimen ha expresado su voluntad de apoyar la iniciativa privada, basta observar los acuerdos con varios grupos de empresarios "honestos y patrióticos", la apertura a capital transnacional como las empresas mineras canadienses, empresas petroleras chinas, brasileñas, etc. En cuanto a la protección de la industria nacional, últimamente se ha tomado la decisión, en acuerdo con los empresarios nacionales, de elevar los aranceles para algunos productos importados, política que ha traído respuestas negativas inmediatas de parte de la Comunidad Andina de Naciones y de la Argentina que frente a la

decisión del estado Ecuatoriano han decidido impedir la entrada de nuestros productos a sus países. El Gobierno ante esta respuesta, que era de esperarse, ha dado pasos atrás en su decisión. Lo propio sucedió con la intervención del Estado ecuatoriano en el caso PORTA, Odebrech, en el no pago de la deuda ilegítima, el gobierno primero asume una posición de total soberanía nacional que la grita a los cuatro vientos y luego simplemente hace lo contrario pero eso si no lo publicita, quedando en la conciencia de la gente el primer gesto negado con la práctica que le sucede. Sería bueno desmontar este juego político-ideológico del gobierno, más allá de que las contradicciones entre sus promesas discursivas y su práctica política no respondan fundamentalmente a incoherencias internas en el programa de gobierno de Alianza País -en lo que Alejandro Moreano llama "una de cal y otra de arena"-, sino, creo, a límites intrínsecos al modelo desarrollista neokeynesiano.

Otro de los puntos importantes de la propuesta desarrollista es la racionalización administrativa para evitar el exceso de gasto público y el déficit fiscal, cosa que el Gobierno ha intentado hacer, recordemos, solo para poner datos, la separación laboral de varios trabajadores de Petroecuador y del INEA, sin embargo por el otro lado ha creado más dependencias estatales que han requerido la contratación de nuevos trabajadores públicos. Así mismo este gobierno ha invertido mucho en subsidios de pobreza, lo cual ciertamente no está mal si paralelamente hubiese emprendido una política real de reactivación de la producción nacional, poniendo énfasis en la producción agraria basada en una reforma agraria que promueva la mediana y pequeña producción. La reactivación productiva de la economía nacional genera empleo y eso va eliminando la necesidad de una política de subsidio a la pobreza, que no liquida las causas de la misma, mirado, no desde una propuesta socialista, sino desarrollista socialdemócrata. Pero otra vez creo que en este caso el problema no es tanto de las incongruencias del Gobierno, que de hecho las tiene, sino de los límites internos al modelo.

A nivel político, la propuesta desarrollista promueve la alianza de clases y desecha la visión marxista de la lucha de cla-

ses; cooperación entre los distintos sectores de clases -empresarios, obreros, profesionales, Iglesia, Fuerzas Armadas, etc. - en busca del bien común, idea inscrita en la doctrina social de la iglesia y el justicialismo social. Una alianza de clases = Alianza País, enfrentada a un "enemigo", la oligarquía pelucona, que no es otro que el conjunto de intereses nacionales en alianza con los extranjeros que entorpece el desarrollo del país. Oligarquía pelucona que se beneficia mientras la económica sea exclusivamente agrario-exportadora-importadora dependiente, sin ningún desarrollo industrial. Hay que aclarar que para el proyecto Desarrollista de Correa y su alianza de clases ("Alianza País"), al enemigo oligárquico se suman, según él los denomina: "los indios infantiles", "los ecologistas románticos" y "la izquierda fundamentalista", cuyo conjunto de intereses también entorpece su programa. En los últimos seis meses se ha operado un desplazamiento del enemigo del régimen, de la "oligarquía pelucona" a los sectores de la "izquierda infantil", cosa que modifica el tablero de la lucha política en el país.

El programa desarrollista busca la integración territorial, económica y social del país en base a la creación de infraestructura productiva y de comunicaciones que permitan la ampliación y conexión del mercado interno y su articulación al mercado internacional. Quizás allí se inscriba las políticas gubernamentales que buscan invertir en infraestructura básica como las hidroeléctricas, la refinería de Manabí, la carretera Manta-Manaos, etc. La inversión pública como la inversión extranjera se dirige básicamente a sectores básicos: Petróleos, hidrocarburos, metales, no es de sorprenderse entonces de la apertura a la licitación para la explotación del ITT, la explotación minera y otros proyectos en camino; la idea es, por un lado, producir nacionalmente los insumos que se necesitan para la industria y no depender de la importación, y, por otro, superar las deficiencias en el ahorro nacional.

En cuanto a la política salarial, las tesis desarrollistas de corte keynesiano prevén una política de pleno empleo y altos salarios, las mismas que se supone son consecuencias de la acción de la libre iniciativa privada y el Estado debido al rápido creci-

miento en la producción con alta tecnología, y el subsiguiente aumento en la productividad. En el actual Gobierno la masa salarial no ha crecido respecto de los anteriores gobiernos neoliberales y el desempleo no ha disminuido, será ¿quizás por la ineficiencia de la iniciativa privada y la ineficiencia del estado o por un lento crecimiento en la producción debido a la precariedad tecnológica o por otros motivos?

En definitiva, creo que el proyecto de Correa se inscribe en una corriente desarrollista neokeynesiana que busca construir la nación, superando la herencia económica colonial y el estado Colonial, digamos, un proyecto que busca "terminar" la revolución democrática burguesa frustrada a principio del siglo XX.

Ahora, según muestra la historia y el pensamiento social sobre dicho proceso, un programa desarrollista neokeynesiano requiere de mucha fortaleza política –respaldo mayoritario de la población y una sólida alianza de clases- y del acceso no solo al gobierno sino al poder, condiciones que hasta ahora Correa tiene, producto de su capacidad de expropiar la lucha popular de las dos últimas décadas, de asumir la dirección política después del vacío de poder dejado por la retirada de la oligarquía presionada por la lucha social, por la implementación de políticas de subsidio social y básicamente por el programa de control y secuestro ideológico de la población. Independientemente de cómo este gobierno logró contar con las condiciones para la aplicación del programa desarrollista neokeynesiano, inscrito en la corriente teórica política de la Tercera Vía o modelo de economía mixta, no es posible no observar que la implementación del mismo tiene trabas y límites, exactamente igual como tuvieron los primeros ensayos de estados keynesianos (Estados de Bienestar) en América latina, en los años 50s.

Trabas que, por un lado, son parte de ciertas ambigüedades de la política económica del régimen que a veces le aleja de la propuesta neokeynesiana, pero sobre todo trabas que tienen que ver con la propia lógica interna del programa que se quiere implementar, la mismas que desarrollo a continuación:

El neokeynesianismo de principio del siglo XXI, que ciertos presidentes como Correa lo quieren denominar Socialis-

mo del Siglo XXI pero que en rigor es lo primero, no cree que el capitalismo y el libre mercado generen un escenario hostil para su programa. He aquí la primera paradoja, como es posible llevar adelante un política de redistribución del ingreso y la riqueza que acorte la brecha entre el sector más rico y el sector más pobre de la población y al mismo tiempo garantizar procesos de acumulación bajo políticas de estabilización y crecimiento económico, al interior de la lógica acumulativa del capital que de seguro asegura lo segundo pero difícilmente lo primero? Se dirá que los países industrializados lo han logrado, un ejemplo son los Estado de Bienestar europeos, sin embargo lo que parece no tomarse en cuenta es que esos proceso se llevaron adelante sobre la base de relaciones asimétricas entre el centro y la periferia. Tratar de implementar el modelo desarrollista nekeynesiano en la periferia capitalista implica enfrentarse a esa estructura mundial capitalista, quizás los intentos de integración latinoamericana aputen a eso, pero todavía está por verse y aún queda por saber que es lo que tenemos que enfrentar si la cosa se diera por ese lado.

Cómo se puede liquidar la herencia económica colonial, basada en la dependencia del modelo agroexportador de productos primarios, manteniendo la vinculación que se tiene con el mercado externo como abastecedores de materias primas y de productos primarios como es el caso del petróleo y los metales. Cómo llevar adelante un proceso de sustitución de importaciones cuando seguiremos siendo economías altamente sensibles al comportamiento de los ciclos de precios en las economías internacionales. De hecho, hoy con la crisis financiera mundial nos enfretamos a la explotación minera a cielo abierto y a la explotación petrolera en reservas naturales cuando los precios de ambos productos están por los suelos. Lo que vamos a sacar de ese negocio es una miseria que no servirá en lo absoluto para incrementar procesos de industrialización nacional, ni siquiera van a servir para obras públicas de infraestructura y asistencia social. Por el contrario el costo ambiental será de dimensiones impesables.

El rol protagónico del estado en el esquema keynesiano-benefactor, basado en convertir al mismo en un gran centro de

poder desde el cual se busca anular las inequidades e injusticias sociales, encuentra dos límites casi infranqueables. Por un lado, se enfrenta con grupos económicos con incidencia política que buscan orientar toda la política estatal a procesos de acumulación, tanto en la esfera privada como en la pública, ajustando el desarrollo económico bajo intereses particulares. Y no me refiero solamente a los grupos económicos de la vieja oligarquía actualmente enfrentada al Gobierno de Correa, sino a grupos económicos incrustados en el corazón del Gobierno y su programa.

En este programa la democracia cumple un papel fundamental como soporte de toda autoridad; de ahí que la democracia se presente como el único camino de legitimación y consolidación del poder, siempre y cuando su lógica hacia abajo promueva mayor participación sobre la representación, cosa que se garantiza por la alianza sociedad civil-ciudadanía-estado, vínculo que dimensiona la relación entre la democracia, el estado y el mercado. No por algo el programa de Correa tiene el nombre de Revolución ciudadana, en la cual la sociedad civil, digamos la ciudadanía, aparece, al menos en el discurso, en un rol importante como veedora del proceso de construcción de una nación, económica, social y política democrática. Digo en el discurso en la medida en que la política del gobierno de Correa contiene muchas características de las formas políticas autoritarias, clientelares de corte populista. Ahora bien, no pienso que este desajuste entre el discurso de la revolución ciudadana y su práctica política se explique por una incongruencia del régimen, sino por una imposibilidad inherente al modelo estatal de la socialdemocracia de la "Tercera Vía". La idea estatal del nekeynesiano habla de un estado sin enemigos que se hace posible en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en la que el estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, tanto en la provisión de seguridad social, como a nivel económico, científico tecnológico, cultural, ético y solidario. En el caso del Ecuador, el Estado que quiere implantar el régimen de Correa, no puede estar exento de enemigos, es decir tiene límites reales en concretar la alianza de clases, en la medida en que no está en capacidad de cumplir las demandas de la sociedad civil, por cierto bastante complejas debido a la heterogeneidad estructural de la

sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, el Gobierno sostiene que se requiere la explotación minera para cubrir los gastos fiscales que permitan responder las demandas sociales de la población (salud, educación, tecnología, etc), sin embargo, la mayoría de esa población demandante se encuentra en el agro y pertenece a comunidades indígena-campesinas que no quieren la explotación minera, pues defienden su territorio, tanto por una cuestión de subsistencia del mundo y la comunidad agraria, como de concepciones distintas respecto de su relación con la naturaleza. Para que el Gobierno lleve adelante su plan social tiene que abrir la explotación de productos primarios y básicamente de metales, empresa que se garantiza sobre la base de la represión a las protestas campesino-indígenas en contra de la explotación minera. Se crea así un enemigo del estado que rompe la supuesta alianza de clases de Alianza País, pues no es cierto que los que se oponen a la minería sean *cuatro románticos, fundamentalistas e infantiles de la izquierda ambientalista*, sino varios sectores rurales articulados a las organizaciones nacionales de indígenas y campesinos.

Ligado a lo anterior está la tesis de la base ciudadana del Estado neokeyniano, ciudadanía históricamente ausente en nuestros países de herencia colonial. Digamos que justamente estos proyectos buscan ampliar la base ciudadana, pero habría que preguntarse que posibilidades reales hay para llevar a cabo este objetivo, tomando en cuenta que la ciudadanía planteada se soporta en la ampliación de derechos asentados en el desarrollo tecnológico-industrial? Se requeriría procesos de industrialización y tecnologización tanto de la vida urbana como, y sobre todo, de la campesina, cosa que de darse - lo cual es bastante complicado tomando en cuenta la articulación asimétrica de las economías periféricas al capital central, sea el norteamericano, chino o brasileño - implicaría la destrucción del mundo andino-indígena, lo que a su vez significa ir en contra de muchos derechos otorgados en la nueva constitución a los llamados pueblos ancestrales, y por otro lado, profundos conflictos sociales que tendrían que ser sofocados con políticas estatales fuertemente represivas, que contradicen la propuesta neokeyniana de un estado y una sociedad democrática, solidaria, etc. etc.

## Un nuevo camino ya recorrido

Ahora bien, digamos que no hay contradicciones o límites internos a la propuesta desarrollista nekeynesiana y que por lo tanto, estos regímenes, como el de Correa, podría llevar adelante un proceso de industrialización (Capitalismo con rostro humano) que sienta *las bases objetivas para una verdadera transformación socialista* en nuestros países; en ese caso creo que es necesario preguntarse si es válido seguir el patrón de desarrollo operado por los países centrales, esto es el proceso de industrialización y todo lo que ello conlleva para la vida de la sociedad? Incluso entendiendo que la aplicación de ese modelo en América latina tiene ciertos doblamientos históricos que daría especificidad y diferencia al proyecto desarrollista en la región.

El modelo de sustitución de importaciones de productos industriales puesto en marcha en la América latina, en el período que va de los años 50s a los 70s del siglo pasado, según dice Wim Dierckxens, trajo consecuencias nefastas para el subcontinente. La incorporación creciente en la sustitución tecnológica implicó el aumento de la importación de capital fijo, lo que lleva necesariamente a radicalizar la dependencia de los países importadores a los monopolios productores de la última tecnología productiva. Esto significa mayor dependencia del mercado mundial no solo por la compra de tecnología productiva, sino por el endeudamiento externo que esa compra involucra, deuda externa que se hace impagable por efecto de el intercambio desigual y de la imposibilidad de cumplir con los pagos en la medida que por el "desarrollo" industrial decae la exportación de materia primas y productos agrícolas, decaimiento que hace imposible tener divisas con las que pagar la deuda. Este es un círculo vicioso que atrapa el destino de los pueblos periféricos dependientes. Por el otro lado, mientras se ensancha el capital fijo, el capital variable —empleo, masa salarial— se mantiene igual y en otros casos caso decae, pues se estanca la capacidad de absorción de la población activa bajo relación salarial. Según datos dados por el mismo autor *la fuerza de trabajo ocupada en la industria, como porcentaje de la población activa no agrícola, disminuye de 31 a 27 entre 1950 y 1970.*

La destrucción del trabajo en el agro, descampesinación, no se compensa con la oportunidad de trabajo asalariado en la ciudad, mucho menos en la industria. Esto conlleva un fuerte migratorio, en un primer momento interno y en un segundo momento externo. El crecimiento del desempleo impidió la conquista de logros sociales y cierta redistribución de la riqueza, objetivos de proyecto desarrollista, pues el desempleo ensanchó el ejército industrial de reserva que provoca la disminución del salario real y las posibles mejoras.

Esta experiencia desarrollista en A. L. significó entonces crecimiento del desempleo, mayor dependencia al mercado mundial, ya no solo por la venta de productos primarios, sino por la dependencia tecnológica y el endeudamiento que esto implicó, por todas estas razones Dierckxens la denomina una reforma en retroceso. Es claro ver en el análisis de este autor los límites internos que tuvo el proyecto desarrollista, lo curioso es que después del período neoliberal, el proyecto progresista de Alianza País quiere andar lo andado, recorrer la novedad caduca del proyecto desarrollista neokeynesiano. Es importante decir que la política neoliberal que abrió la "larga noche neoliberal", que el Gobierno de Alianza País promete superar, fue la posta del capitalismo ante el fracaso del proyecto desarrollista en América Latina de los años 50, 60 y 70.

Otra vez más como la gran novedad ya caduca se promete desarrollo, sustitución de importaciones vía industrialización y compra de alta tecnología productiva, fortalecimiento del estado, soberanía, construcción de la nación, recuperación de la patria, etc. Deberíamos preguntar como se va a hacer todo esto, repitiendo el esquema desarrollista keynesiano ya fracasado? Cambiando la dependencia al mercado mundial, de ser exportadores de materias primas y productos primarios, cuyo precio fluctúa en el mercado internacional siempre en nuestro perjuicio, a ser importadores de alta tecnología de producción industrial que aumente la impagable deuda externa? O quizás combiando las dos: dependencia en la figura de las empresas mixtas? De hecho para la extracción de metales, necesaria para conseguir divisas para, a su vez, comprar la tecnología industrial, ya necesi-

tamos alta tecnología que no tenemos y que por lo tanto estamos obligados a comprarla o alquilarla a los monopolios que exportan esa alta tecnología, y eh ahí el nuevo endeudamiento que no podremos pagar pues los precios de los productos primarios están a la baja y si no lo están lo estarán siempre salimos perdiendo en los negocios del capital. Y, otra vez atrapados en el círculo vicioso de la modernización económica. Esta lógica de la explotación minera es la misma de la construcción de refinerías, puertos, construcción de hidroeléctricas, carretera y todo lo necesario para la industrialización del país. Lógica que nos obliga a comprar la tecnología, la misma que de hecho queda hipotecada a los monopolios que la venden, pues no hay como comprarlas de contado; y así estos se adueñan, sin necesidad de transferencia de capital, de la "naciente" industria "nacional", como ya esta pasando con las transnacionales canadienses, brasileñas, chinas y últimamente otra vez norteamericanas.

Así comienza nuevamente el viejo cuento que: *"A partir de las 'entregas condicionadas' de equipos, se inicia la primera explotación de utilidades por mecanismos de sobrefacturación del capital fijo. El siguiente paso es la entrega de equipo asimismo sobrefacturado bajo el concepto de coinversión para 'aliviar' la carga."* (Dierckxens), acaso eso no es el argumento del Gobierno para justificar la ley minera, por ejemplo. *"Gracias a la facturación del capital fijo importado por las transnacionales, éstas logran la transferencia de utilidades extraordinarias, obtenidas en el continente, hacia los países centrales."* (Dierckxens) Acaso así nos van a hacer pagar la crisis financiera mundial?

#### Notas:

- 24 Benjamín, Walter, Tesis de la Filosofía de la Historia,
- 25 Zizek, Slavoj, La Revolución Blanda, Ed. Atuel, Buenos Aires, 2004, p. 41.